



e-l@tina

Revista electrónica de estudios latinoamericanos

e-l@tina es una publicación del
Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina ([GESHAL](#))
con sede en el
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe ([IEALC](#))
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires

**¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis
(2003 – 2010)**

Adrián Piva

Investigador CONICET, Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Correo electrónico: apiva72@hotmail.com.

Recibido con pedido de publicación: 2 de junio de 2012

Aceptado para publicación: 8 de julio de 2012

Resumen

En este artículo nos preguntamos si la recomposición del poder político y del consenso en Argentina durante el período kirchnerista constituyó una nueva hegemonía. Trataremos de acercarnos a una respuesta a través del análisis de la relación entre Estado y conflicto social entre 2003 y 2010. Específicamente, analizaremos la capacidad del Estado para internalizar el conflicto social. Este aspecto apunta al corazón del problema en la medida que consideramos que la estructuración de mecanismos institucionales de canalización de los conflictos sociales, en tanto manifestaciones de las contradicciones sociales, constituye un aspecto nodal de toda hegemonía. Concluimos que una serie de indicadores señalan la existencia de una disputa en torno de dichos mecanismos. En estas condiciones, la recomposición del poder político asumió la forma limitada de un consenso en torno al Kirchnerismo, no de una redefinición de la lucha política en el marco de mecanismos institucionales consensuados por oficialismo y oposición. La oposición al Kirchnerismo tomó entonces el carácter de rechazo al modo de recomposición política y su acción política devino fácilmente anti institucional. El gobierno, entonces, tuvo éxito en polarizar el espacio político en términos de oposición Kirchnerismo – anti kirchnerismo. El costo de ese éxito fue sacrificar la constitución de una hegemonía que brindara estabilidad a la dominación.

Palabras clave: Argentina; Estado; Hegemonía; Consenso; Conflicto social.

Summary

A new Hegemony? The State in front of the social conflict in the post-crisis Argentina (2003 - 2010)

In this article we ask whether the restructuring of political power and consensus in Argentina during the Kirchnerist period constituted a new hegemony. We try to approach an answer by analyzing the relationship between state and social conflict between 2003 and 2010. Specifically, we analyze the state's ability to internalize the social conflict. This aspect points to the heart of the problem to the extent we believe that the structuring of institutional mechanisms for channeling social conflict, defined as conjunctural manifestation of social contradictions, is a nodal dimension of any hegemony. We conclude that a number of indicators point to the existence of a dispute over these mechanisms. Under these conditions, the restructuring of political power took the form of a limited consensus around the Kirchnerism, not of a redefinition of the political struggle within the framework of institutional devices agreed by the ruling and opposition. As result, opposition to Kirchnerism took the character of a rejection to political recomposition mode and political action became anti institutional easily. The government then succeeded in polarizing the political space in terms of an opposition between Kirchnerism and anti Kirchnerism. The cost of that success was to sacrifice the constitution of a hegemony that would provide stability to the political domination.

Key words: Argentina; State; Hegemony; Consensus; Social Conflict.

Introducción

El primer gobierno kirchnerista fue el gobierno de la recomposición del poder político, es decir, de la recomposición de la autonomía ilusoria-objetiva del Estado¹

Dicha tarea tuvo una doble dimensión. Por un lado, la reconstitución del consenso en torno al ejercicio del poder político como fundamento de la estabilización de la dominación política y económica del capital. Ello suponía la salida de la crisis política abierta en 2001 y, en virtud de ello, constituía una *tarea universal*, en el sentido de que expresaba el interés del conjunto del capital confundiendo en un mismo movimiento con el interés del conjunto social, como respuesta a una crisis que afectaba a todas las clases y fracciones de clase. Como tal era el ejercicio de una función hegemónica. Pero, al mismo tiempo, de modo inmediato, suponía la necesidad de construir consenso en torno a la figura del nuevo presidente que había llegado al gobierno con una debilidad de origen producto de la crisis del sistema político post 2001. Los dos grandes partidos históricos, la UCR y el Partido Justicialista (PJ), estallaron después de la crisis y se presentaron fracturados a las elecciones presidenciales de 2003. La fractura de la UCR tendió a cristalizar en la conformación de nuevas fuerzas políticas. El PJ transformó la elección nacional en una interna abierta, tres candidatos, incluido el ex presidente Carlos Menem, se presentaron a esas elecciones con el aval del congreso partidario. Producto de estas condiciones, Néstor Kirchner con el veintidós por ciento de los votos se transformó en presidente de un país sumergido en una crisis de representación.

Ambas dimensiones de la recomposición de la dominación política estaban entrelazadas, sin embargo, no sólo es necesario distinguirlas desde el punto de vista analítico sino que veremos que dicha diferencia tuvo importantes efectos prácticos.

En este artículo nos preguntamos si la recomposición del poder político y del consenso durante el período kirchnerista constituyó una nueva hegemonía. Trataremos de acercarnos a una respuesta a través del análisis de la relación entre Estado y conflicto social entre 2003 y 2010. Específicamente, analizaremos la capacidad del Estado para internalizar el conflicto social a través de la estructuración de mecanismos institucionales. Entendemos la hegemonía como un modo histórico de la lucha de clases que se caracteriza, en primer lugar, por la capacidad de la burguesía de presentar las condiciones para su propia expansión como condiciones para la “expansión de las energías nacionales” (Gramsci 1998: 58). Esto es, de presentar las condiciones de su reproducción particular como condiciones de la reproducción del conjunto social². En segundo lugar, dicha potencialidad hegemónica, sólo se realiza en “formas de Estado” determinadas. En este sentido, en el núcleo de la construcción de una hegemonía se halla la estabilización de mecanismos de internalización de las contradicciones sociales mediante la captura estatal de los procesos de lucha, su internalización en mecanismos rutinizados que permitan traducir demandas potencialmente antagónicas y disruptivas del régimen político en una lógica reformista de otorgamiento de concesiones (Piva 2009). Es en ese contexto que el estudio del conflicto social, ocupa un lugar central, en tanto que manifestación coyuntural de las contradicciones sociales. Secundariamente apelaremos a datos de las elecciones de 2003, 2005, 2007 y 2009.

¹ La expresión “ilusoria-objetiva” refiere, en su origen, a la noción de “apariencia objetiva” utilizada por Marx (1998) que da cuenta del carácter fetichista de los fenómenos sociales en el capitalismo. Supone apariencia de objetividad (de cosa) de las relaciones entre los hombres y, al mismo tiempo, que esa apariencia de objetividad es el modo en que efectivamente se presentan las relaciones entre los hombres, no mero engaño. Ese mismo carácter comparten conceptos como los de “forma objetiva” (Lukacs 1985), “ilusión objetiva” (Horkheimer y Adorno 2006) o “abstracción real” (Sohn-Rethel 1980). Aquí refiere a la particularización del Estado y, por lo tanto, a la separación entre lo económico y lo político, en este doble sentido de “objetividad”.

² Ello presupone condiciones del modo de acumulación de capital que lo hagan posible y que aquí, para enfocarnos en el problema planteado, dejamos momentáneamente de lado.

El material empírico que ha servido de base a esta investigación fue la recolección de todas las notas sobre conflictos sociales aparecidas en el Diario La Nación.

El análisis fue prioritariamente cualitativo. Con ese fin, del total de los conflictos sociales recolectados fue seleccionado un conjunto de casos que fueron reconstruidos apelando a tres diarios de tirada nacional (La Nación, Clarín y Página 12). Los casos fueron elegidos en función de los siguientes criterios:

- 1- porque en todos los casos debió intervenir el Estado nacional
- 2- porque todos los conflictos tuvieron un fuerte impacto político y en los medios de comunicación.

El ordenamiento de los datos basado en los casos seleccionados atendió a las siguientes dimensiones:

1. La identidad auto atribuida de los sujetos de la protesta (trabajadores, comerciantes, vecinos, etc.)
2. El tipo de demanda formulada
3. Las formas de lucha y organización de los sujetos de las protestas
4. La capacidad de los sujetos de las protestas de universalizar sus demandas
5. La existencia o no de articulación, explícita o implícita, por los propios sujetos de la protesta de objetivos reivindicativos (inmediatos) y políticos (mediatos y orientados al Estado).
6. El rol jugado en o frente al conflicto por los actores de la oposición política: participación, dirección, apoyo, oposición, búsqueda de institucionalización, otras.
7. El posicionamiento del gobierno nacional frente al conflicto: negociación, búsqueda de institucionalización, intento de aislamiento/neutralización, represión, respuesta tendiente a la satisfacción de las demandas, otras.
8. Resultado del conflicto. Esta dimensión abarca a su vez como sub dimensiones: 1- el resultado en términos de los objetivos inmediatos y mediatos de los sujetos de las protestas; 2- el resultado en términos del fortalecimiento/debilitamiento del apoyo social al gobierno.

Aunque el análisis fue prioritariamente cualitativo, también se apeló a datos cuantitativos. Para ello, se utilizó la base de datos de huelgas obreras de 16 variables que comenzamos a construir durante el año 2010 en base a información recolectada en el Diario La Nación y los registros de número y tipo de acciones de protesta protagonizadas por movimientos de trabajadores desocupados y de número de acciones de protesta por sujetos constituidos fuera del campo de la producción y de las identificaciones clasistas, ambos a partir de la misma fuente³.

2003 – 2005: La reconstrucción del consenso político

Los primeros dos años del gobierno de Kirchner constituyeron un período de reconstrucción del consenso y de recomposición del poder político. Al mismo tiempo, los niveles de normalización e internalización del conflicto y la durabilidad de tales procesos variaron para los diferentes grupos sociales y sujetos de las protestas. Particularmente, las características adquiridas entre 2003 y 2005 por la relación entre gobierno y conflicto obrero – tanto para ocupados como para desocupados – parecen haber sedimentado en el aparato de estado estabilizando el vínculo funcional entre las organizaciones sociales y sindicales y el Estado. El conflicto obrero entre 2003 y 2010, más allá de variaciones coyunturales, mantuvo sus características esenciales. En contraposición, la adhesión inicial al gobierno y la desmovilización de los “sectores medios urbanos” resultó más inestable⁴. Todo

³ Para una descripción detallada de la base de datos ver Piva 2011.

⁴ “Sectores medios” no es una categoría de clase sino sociocultural. Incluye a la pequeña burguesía tradicional (pequeños propietarios no liberados del trabajo) y dos conjuntos de asalariados: las llamadas

intento de traducción institucional del inorgánico universo de protestas de las identidades no vinculadas al mundo laboral y, en especial, de los “sectores medios urbanos” ha fracasado.

Los movimientos de trabajadores desocupados – también llamados “piqueteros”- fueron protagonistas del ciclo de movilizaciones del año 2001 y el número de acciones colectivas de dichos movimientos creció hasta el año 2003 (Piva 2006). Una primera aproximación cuantitativa (ver cuadro 2) nos muestra que el número de acciones, después de crecer en 2004, cae en 2005 y, sobre todo, en 2006, año a partir del cual no se recuperarán los niveles de los primeros dos años. También la radicalidad de las medidas decrece fuertemente. El porcentaje de acciones radicales (cortes, ocupaciones, tomas, etc.) pasa de representar porcentajes superiores al 80 por ciento de las acciones en 2004 y 2005 a menos del 40 por ciento en 2006 y del 30 por ciento posteriormente. Estos datos demuestran el éxito del gobierno en normalizar el conflicto de los movimientos de desocupados. El porcentaje de medidas radicales sólo recupera coyunturalmente los niveles previos en el segundo semestre de 2009, dato que analizaremos luego.

Una aproximación cualitativa también revela una tendencia al aislamiento, fragmentación y retroceso relativo del movimiento piquetero (Svampa 2008, Campione 2008). El gobierno, como parte de su estrategia de recomposición del poder político a través de la satisfacción gradual de demandas de los grupos subalternos, produjo una ruptura en la relación con los movimientos de desocupados respecto de los gobiernos previos, adoptando una política de negociación y otorgamiento de concesiones.

El posicionamiento de las organizaciones piqueteras frente a este giro del gobierno definió tendencialmente tres posturas que se traducirían durante los siguientes dos años en una fractura del movimiento de desocupados.

Un primer conjunto de movimientos definiría durante los años 2003 y 2004 una postura oficialista: Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Movimiento Barrios de Pie, Movimiento Evita, Frente Transversal Nacional y Popular, etc. Este posicionamiento no debe atribuirse exclusivamente a una cooptación o a un mero intercambio de paz social por beneficios materiales. El movimiento de desocupados era desde el inicio un movimiento heterogéneo, que contenía en su seno corrientes populistas o nacional populares (Svampa 2003, 2008b). En este sentido, existían “tradiciones comunes” que posibilitaban una “identificación simbólica” con el gobierno Kirchnerista (Cortes 2009). Por otra parte, la gran mayoría de las luchas de los desocupados de los noventa, no tuvieron, objetivamente, una orientación antiestatal, sino que insinuaban, en sus demandas, prácticas e imaginarios, la restauración de un Estado populista (Piva 2009b).

Un segundo grupo de movimientos, particularmente el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD Aníbal Verón) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), adoptarían una posición moderada, sosteniendo su oposición al Gobierno mantendrían abiertas líneas de negociación y moderarían la radicalidad de las medidas de protesta en un intento por evitar un creciente aislamiento.

Un tercer grupo, heterogéneo por sus tradiciones ideológicas, estrategias y tácticas, conformado por el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTD Aníbal Verón), el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (MST), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), etc. mantendría una posición de enfrentamiento al gobierno e intentaría sostener la radicalidad de las acciones de protesta.

De conjunto, esta reconfiguración del mapa piquetero se tradujo en la fractura del espacio y en la fragmentación de sus luchas. Este hecho significó una ruptura de la tendencia a la centralización y

“nuevas clases medias” (i.e. mandos medios) y “asalariados puros” asimilados por sus prácticas y representaciones a la pequeña burguesía.

coordinación del movimiento de trabajadores desocupados que alcanzó su mayor grado con las asambleas nacionales piqueteras del año 2001 y los planes de lucha conjuntos de aquel año.

El gobierno, desde mediados de 2003, enfrentó la alta conflictividad del movimiento de desocupados con una política que combinó la satisfacción gradual de demandas y una estrategia de aislamiento del denominado sector duro.

Por un lado, tendió a satisfacer las demandas de las organizaciones oficialistas y en menor medida de otras organizaciones opositoras, pero reemplazando los más universales planes “jefes y jefas de hogar”, implementados por Duhalde, por subsidios a microemprendimientos y cooperativas de trabajo a través de diversos programas, como el “Manos a la Obra”. Por otro lado, buscó fortalecer el rol de los municipios del Gran Buenos Aires a través del otorgamiento de la asignación, la implementación y el contralor de dichos programas a las intendencias. Esto se desarrolló en el marco de un sostenido descenso del desempleo.

Frente a las organizaciones que sostuvieron una posición de enfrentamiento, el gobierno llevó adelante una política que denominó explícitamente como “ni palos ni planes”. Se trató de una estrategia que combinó una actitud de predominante tolerancia hacia la protesta en términos represivos, la negativa a otorgar concesiones y el intento de aislar las protestas a través de una práctica y un discurso orientados a bloquear la articulación con otros sectores sociales y la universalización de las demandas. El centro de la estrategia fue una disputa política pública en torno a la legitimidad de cortes, acampes y ocupaciones. En el marco de una construcción de consenso sostenida en la satisfacción gradual de demandas, el gobierno negoció y otorgó concesiones a organizaciones que enmarcaron la protesta en límites que progresivamente fue tornando más restrictivos. Simultáneamente, construía un discurso público que vinculaba protesta radical y delito, especialmente invocando la figura de la “extorsión”. En esa línea, se estimuló discursivamente la judicialización de los cortes, ocupaciones y reclamos de alimentos a empresas privadas, aunque no fue el gobierno nacional, por lo general, el que tomó la iniciativa de realizar las denuncias.

La respuesta a la protesta social en general, y a la de los desocupados en particular, fue predominantemente no represiva. La mayoría de las acciones represivas durante el período fueron ejecutadas por policías provinciales. La decisión de no reprimir del gobierno nacional estuvo en gran medida vinculada a un proceso de deslegitimación del uso de la violencia material estatal como respuesta a las protestas sociales desde 1997 hasta los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio de 2002 (Piva 2009c). La represión, durante ese período, tendió a producir enfrentamientos, en lugar del repliegue de los manifestantes, y manifestaciones de rechazo de los “sectores medios urbanos”, fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires, y del sindicalismo disidente. En junio de 2002 el resultado fue el adelantamiento de las elecciones. Sin embargo, el gobierno apeló a la represión en casos puntuales, y se advierten en ellos ciertas regularidades. En primer lugar, la mayoría de los casos correspondió a ataques u ocupaciones de empresas privadas y, en menor medida, al ataque o intento de ocupación de edificios públicos. En segundo lugar, la represión fue selectiva, se dirigió a “piqueteros duros”, al tiempo que no se utilizó en casos semejantes realizados por organizaciones oficialistas. Pareció, entonces, marcar los límites de tolerancia a las organizaciones sociales opositoras. Pero lo que se expresa en esta contraposición, más allá de la distinción inmediata oficialismo - oposición, es una doble dimensión del conflicto con los movimientos de desocupados. Por un lado, el conflicto en torno de las demandas mediatas e inmediatas de los movimientos: trabajo genuino y planes y subsidios. Pero, por otro lado, y tendencialmente predominante, un conflicto en torno al control del conflicto mismo. La política diferenciada hacia la FTV y Barrios de Pie, pero parcialmente también hacia la CCC y el MTD Aníbal Verón, se debe a cierta disposición de estos movimientos a negociar las demandas formuladas dentro de los límites a la protesta demarcados por el gobierno. Esto es, a la funcionalidad parcial de cierta vinculación institucional o tendencialmente institucionalizada – y no sin tensiones, especialmente en

el caso de la CCC y el MTD - que permitiría al gobierno cierto control o internalización del conflicto social. Este intento de normalización del conflicto piquetero tiene cierta analogía con la relación del gobierno con los sindicatos con personería gremial, más allá de que algunas medidas puntuales que tomen, por ejemplo, los bloqueos a empresas privadas del sindicato de camioneros, puedan resultar disfuncionales.

A menos de dos años de asumido, el gobierno había incorporado a organizaciones importantes como la FIV y Barrios de Pie a su coalición política, había fragmentado el movimiento y había aislado a los piqueteros duros y deslegitimado sus métodos de protesta. Este éxito indicaba el importante consenso social construido y el grado de recomposición del poder político estatal y de su apariencia de autonomización respecto de la sociedad civil. Al mismo tiempo, dicha recomposición fue también producto de la capacidad del gobierno para interiorizar y normalizar el conflicto.

Pero, además, el reflujo de la movilización y la reorientación de la política social del gobierno hacia la conformación de cooperativas y el financiamiento de obras, en un contexto de reducción del desempleo, parecen haber impulsado cambios en la identidad de los movimientos. A partir de 2006, se observa un crecimiento de las demandas de carácter territorial, como la demanda de viviendas. Simultáneamente, los movimientos profundizaron patrones de movilización y organización más definidamente territoriales. Apelaron a las ocupaciones de tierras y el reflujo dio lugar a un repliegue a los barrios y al trabajo comunitario perdiendo peso el vínculo y articulación con el movimiento de trabajadores ocupados. En este sentido nos preguntamos hasta qué punto es posible seguir considerando a esos movimientos como organizaciones de desocupados.

La recomposición del consenso y la tendencia a la normalización del conflicto obrero reaparecen en el análisis de las protestas de ocupados. Los datos muestran una inversión en la evolución cuantitativa de los conflictos de ocupados y desocupados respecto de la observada para los años 1989–2003. Durante ese período la tendencia fue a la caída de los primeros y a un aumento de los segundos. Como se observa en el cuadro 1, la frecuencia de paros crece en los años 2004 y 2005. Aunque cae en 2006, el número de paros ese año es superior al de 2003 y se mantiene en esos niveles hasta 2009, con otro pico significativo en 2007. De acuerdo al sitio Nueva Mayoría, que publica datos del período 1989–2007, 2005 sería el año de mayor número de conflictos protagonizados por ocupados desde 1989 y todo el período 2004–2007 presentaría un promedio mayor al período iniciado en 1989⁵.

Del mismo modo que las tendencias opuestas entre 1989 y 2001 no podían desligarse del aumento del desempleo, la evolución de la protesta de ocupados y desocupados desde 2003 no puede desvincularse de la reducción del desempleo, que para fines de 2006 ya mostraba niveles de un dígito. También se encuentra parcialmente asociada con la caída del desempleo la recuperación de la lucha salarial, estimulada, además, por la inflación y el establecimiento de las paritarias. El hecho de que los asalariados registrados del sector privado consiguieran aumentos reales que superaron lo perdido por la devaluación y avanzaron sobre lo perdido durante los noventa evidencia el fortalecimiento relativo de las capacidades de acción colectiva de la clase obrera⁶.

Asimismo, a diferencia de los noventa, los conflictos obreros han recuperado peso político y social. Varios de dichos conflictos han estado entre los más significativos del período y con la vuelta de las paritarias y el retorno de la lucha salarial, han readquirido centralidad política. A su vez, presentan un conjunto de características comunes. En primer lugar, la mayoría fueron protagonizados por comisiones internas y sindicatos locales. En este sentido, la transformación de las

⁵ Ver www.nuevamayoria.com.ar.

⁶ El salario real de los trabajadores registrados del sector privado era en el último trimestre de 2006 un 18,4% superior al del último trimestre de 2001. Los salarios del Estado y del sector privado no registrados eran 17,3% y 23,8% inferiores. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Argentina).

relaciones de fuerza entre las clases, de la situación política después de diciembre de 2001 y el descenso del desempleo constituyeron condiciones para que la tendencia a la fragmentación de los conflictos durante la década del noventa pudiera dar lugar a un proceso de acumulación de fuerzas y de cristalización o consolidación de experiencias a nivel molecular. Sin embargo, dicho proceso –que dio lugar al surgimiento y desarrollo de comisiones internas y direcciones locales opositoras– fue desigual entre las distintas experiencias y tuvo un carácter local, no generalizado. Este bajo volumen y densidad sociales del proceso de acumulación molecular supuso que estas experiencias, si bien constituyeron –y constituyen– un desafío para las direcciones sindicales, no significaron una amenaza a la supervivencia de las direcciones de los sindicatos cegetistas, al menos hasta hoy.

Un segundo hecho, es que en varios de estos conflictos se desarrollaron prácticas sindicales que pretendieron diferenciarse de –y enfrentarse a– las prácticas sindicales tradicionales y que se vinculan, en varios aspectos, con las formas del conflicto social durante la segunda mitad de los noventa y la crisis de 2001. La apelación al funcionamiento asambleario, la utilización de medidas no tradicionales en combinación con formas tradicionales de lucha, la radicalidad de las medidas, etc., son algunos de dichos aspectos. En tercer lugar, a la apelación a medidas radicales se sumó una tendencia a la duración más prolongada de los conflictos⁷.

Desde el año 2003, entonces, se desarrolló un proceso de recomposición de la acción sindical de los trabajadores que, por sus características, se vincula con el ciclo de resistencias de desocupados y ocupados entre 1996 y 2001. Simultáneamente, a partir de 2003, se recuperaron aspectos del viejo vínculo funcional de los sindicatos con el Estado centrado en la lucha salarial. Durante los noventa, bloqueada la internalización del conflicto obrero por la lucha en torno al salario, la mayor parte de los sindicatos desarrollaron una estrategia neoparticipacionista. La Confederación General del Trabajo (CGT) conducida por los “gordos”⁸ se revinculó funcionalmente al Estado mediante una estrategia consistente en la vehiculización negociada del programa de reformas, basada en su capacidad de disciplinamiento de las bases obreras, a cambio de la conservación de capacidades institucionales, financieras y organizativas. A pesar de ello, no evitó la pérdida de peso político, las divisiones internas (la escisión de la CGT-Moyano y el nacimiento de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)) y su retroceso en el escenario de los conflictos sociales ante otras organizaciones (como las de desocupados). Esta situación se modificó desde 2003. El sistema de sindicatos tendió a unificarse (reunificación de la CGT) y a encolumnarse detrás de la administración kirchnerista (tanto la CGT como, en gran medida, la CTA). Asimismo, los sindicatos recuperaron una parte del peso político que habían perdido y recuperaron su centralidad como mecanismo institucionalizado de canalización de las luchas sociales. Se reabrieron las negociaciones paritarias y tuvo un fuerte impulso la negociación de convenios colectivos⁹. El número de convenios colectivos creció todos los años pasando de 348 en 2004 a 2038 en 2010¹⁰. A ello debe sumarse la convocatoria periódica del Consejo del Salario mínimo, vital y móvil, de conformación tripartita. A su vez, el relanzamiento de la discusión salarial pudo, entre 2003 y 2006, ser contenido dentro de los límites impuestos por el

⁷ Este crecimiento de la conflictividad de los ocupados y el protagonismo de las instancias sindicales descentralizadas ha sido también desarrollado, entre otros, por Svampa (2008), Campione (2008), Atzeni y Ghigliani (2008) y Scolnik (2009). Sobre la importancia de la acción sindical de las comisiones internas desde 2003 y del vínculo de las prácticas sindicales de las comisiones internas opositoras con las desarrolladas por otros grupos sociales durante la crisis de 2001 ver Scolnik (2009) y Lenguita y Montes Cató (2009).

⁸ Denominación popular de los dirigentes de los grandes sindicatos de servicios.

⁹ Para una visión sobre el rol que la conservación de las capacidades organizativas sindicales durante la reforma de los noventa tuvo en la reemergencia del conflicto obrero y en el retorno de mecanismos de intermediación “neo corporativistas” ver Etchemendy y Collier (2008).

¹⁰ Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación, Argentina.

Gobierno, que fijó informalmente pautas anuales de aumento salarial¹¹.

El gobierno, frente al aumento de las luchas sindicales entre 2003 y 2005 y el mantenimiento de elevados niveles de conflictividad posteriores, logró canalizar el conflicto a través de una lógica de satisfacción gradual de demandas – la mayoría de los conflictos tuvieron resoluciones favorables para los trabajadores - resituar al ministerio de trabajo como ámbito de negociaciones tripartitas y, por lo tanto, recomponer la apariencia de autonomización del Estado respecto de la sociedad civil. Esto es, logró internalizar el conflicto obrero en una lógica reformista de concesiones y tendió a normalizarlo. En aquellos casos en los que el conflicto amenazó con desbordar los mecanismos institucionales de negociación o desafiar los límites demarcados por el gobierno, éste fue, por lo general, capaz de aislarlo. En cuanto a la respuesta represiva, se observa también para los ocupados una lógica de represión selectiva orientada a establecer los límites tolerables de la protesta. Se focalizó en conflictos prolongados, que incluyeron medidas de lucha radicales y desarrollados por comisiones internas opositoras o en zonas y áreas políticamente sensibles. Pero, también en este caso, la respuesta predominante fue no represiva.

Las tendencias a la normalización e institucionalización del conflicto obrero se han sostenido en el tiempo y consolidado, aunque coexistiendo con importantes niveles de conflictividad de los trabajadores ocupados y con la persistencia en la apelación a la acción directa radical.

Pero entre 2003 y 2005 se produjo también un proceso de desmovilización de ahorristas, asambleístas, vecinos, pequeños propietarios de la ciudad y del campo, etc. Todos estos actores, fundamentalmente los “sectores medios urbanos”, habían sido protagonistas de la rebelión popular de diciembre de 2001 y de la continuidad de la movilización durante el año 2002. Durante los primeros dos años del gobierno de Kirchner, la lógica de reconstrucción del consenso a través de la recuperación y satisfacción gradual de demandas de los grupos sociales movilizados también alcanzó a esos sectores. La renovación de la Corte Suprema de Justicia, la devolución a sus dueños de los ahorros bancarios con pérdidas menores a las esperadas, la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, fueron algunas de las principales medidas que recuperaron demandas de organizaciones de DDHH, ahorristas, asambleístas, etc. Todo esto en el contexto de un sostenido aumento del consumo. La desmovilización de ahorristas, asambleístas y vecinos y la caída del número y la radicalidad de las protestas piqueteras daban a fines de 2005 e inicios de 2006 una apariencia de retorno a la “normalidad”. La amplitud del consenso construido entre 2003 y 2005, que abarcaba el heterogéneo mundo de los “sectores populares”¹² y de los “sectores medios”, es decir, al conjunto de los asalariados y de los pequeños propietarios, tuvo su manifestación electoral. El 14 de setiembre de 2003 el PJ se imponía con el 40,3% en la Provincia de Buenos Aires en la elección de Gobernador y en la ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra derrotaba en el balotaje de la elección para Jefe de Gobierno a Mauricio Macri con el 53% de los votos, una elección en la que el apoyo de Kirchner a Ibarra era visto por todos los medios de prensa como determinante para la victoria. En 2005 Cristina Fernández de Kirchner se imponía como candidata a senadora al Duhaldismo - que había prohibido a Néstor Kirchner – en su propio territorio, la provincia de Buenos Aires, con el

¹¹ Desde 2007 parece haber una tendencia a la perforación de los techos de aumento salarial y a un retorno de la puja distributiva inflacionaria, pero no todavía a una pérdida de control del gobierno.

¹² La categoría “sectores populares” es utilizada aquí para denotar que sólo una parte de la clase obrera, definida objetivamente, actúa como clase. Otra parte de ella se presenta con identidades ligadas a prácticas, sentidos de pertenencia y modalidades de incorporación política de carácter territorial. Ambos conjuntos son abarcados por la expresión “sectores populares” en una tradición que, por lo general, se ha opuesto a la categoría marxista de clase. Otra parte de la clase obrera actúa bajo el modo indiferenciado de “sectores medios”, ver supra nota 8. Para una discusión del concepto marxista de clase como relación social objetiva y como proceso de formación de clase en las luchas ver (Piva 2008).

45,77% de los votos y más de 20 puntos de diferencia. También derrotaba a Menem en La Rioja. En Córdoba, se daba la particularidad de que se declaraban Kirchneristas el candidato oficialista de Unión Por Córdoba, que ganó con 37,76% de los votos, y el del Frente Nuevo de Luis Juez, que obtuvo el segundo lugar con el 24,84% de los votos. A nivel nacional, el kirchnerismo se convertía en la primera fuerza y superaba el 40% de los votos. En la capital, sin embargo, ocupaba el tercer lugar con el 20,41% afectado por el incendio del local nocturno República de Cromañón en el que murieron 194 jóvenes y del que se responsabilizaba al gobierno porteño, aliado del presidente Kirchner. También perdía en Santa Fe donde el partido justicialista resultaba afectado por las inundaciones de 2003. Ambos acontecimientos fueron causa de importantes movilizaciones durante 2004 y 2005.

Pero el movimiento de protestas no vinculado al mundo laboral de mayor impacto político del período fue el movimiento de protestas contra la inseguridad. En 2003 se producían puebladas, marchas y cacerolazos motivados en casos de inseguridad en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y en la Capital Federal. Es en este contexto que emergió la figura de Juan Carlos Blumberg a fines de marzo de 2004. El caso de su hijo secuestrado y asesinado causó conmoción y sus convocatorias tuvieron un acompañamiento masivo. El gobierno inicialmente no se enfrentaría a Blumberg. Si bien su discurso - orientado al endurecimiento de las penas, la imputabilidad de los menores, el otorgamiento de mayores atribuciones a las fuerzas policiales, etc. – resultaba contradictorio con un discurso oficial centrado en el respeto de los derechos humanos y contrario a la solución represiva de problemas sociales, el énfasis de Blumberg en “despolitizar” su reclamo permitió al gobierno contener y acompañar su demanda y esterilizar cualquier intento de reposicionamiento opositor alertando sobre “el uso político del dolor”. Sin embargo, los resultados electorales de Capital y Rosario y las movilizaciones por la inseguridad señalaban la inestable adhesión de los “sectores medios urbanos” y las dificultades para traducir institucionalmente su descontento.

2006-2007: los sectores medios urbanos se alejan del gobierno

2006 y 2007 serían años de activación de un conjunto de actores de la protesta cuyas identidades se articularían fuera del campo de la producción y de las identificaciones clasistas. A pesar de su heterogeneidad es posible observar en las protestas de “ciudadanos”, “vecinos”, “usuarios”, “consumidores”, “ambientalistas”, y un largo etc., una serie de rasgos comunes que señalan continuidades con rasgos de la protestas durante los años noventa y principios del nuevo siglo.

En primer término, la radicalidad de las formas de protesta. Fue usual la apelación a cortes de rutas y calles, la ocupación y el ataque a edificios públicos, las puebladas y el ataque a bienes de empresas privadas.

En segundo lugar, la enorme mayoría de las protestas manifiesta un carácter antipolítico, si bien su significado varía con la variación de identidades, de demandas y de sus articulaciones.

En tercer lugar, las demandas demostraron, en la mayoría de los casos, una elevada capacidad de universalización y los manifestantes tendieron a aparecer como “los ciudadanos”, “los vecinos” o directamente “la gente”, esto es, a asumir inmediatamente identidades universales. Sin embargo, más que pretender la representación de la totalidad pretendieron ser, o parecieron experimentarse como, la emergencia del propio “pueblo”, de la “ciudadanía”, o de la “gente” como tales y sin representación. Al mismo tiempo, el significado político de sus demandas permaneció abierto y la estabilización temporaria de uno u otro significado dependió de la articulación contingente con otras demandas. Esta curiosa simultaneidad de particularidad/universalismo será analizada enseguida en relación a las protestas contra la inseguridad.

En cuarto lugar, aunque participaron “sectores populares” en las protestas, un número

significativo de casos presenta indicadores de que sus protagonistas son individuos y grupos sociales pertenecientes a los “sectores medios”.

Un primer movimiento de acciones colectivas que creció durante 2006 y 2007 es el de la demanda de viviendas. En el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron las ocupaciones de tierras y los cortes de rutas, calles y vías de trenes en reclamo de viviendas. La relación de los diferentes niveles de gobierno con esta demanda es ambigua. Las ocupaciones, cesiones de tierras y los subsidios para la construcción de viviendas fueron históricamente un aspecto importante de la construcción política territorial del peronismo. Simultáneamente, la reorientación de la política social del gobierno, que incluyó planes y subsidios para cooperativas de autoconstrucción, fortaleció este tipo de demandas y la ocupación de terrenos. En este sentido, el movimiento por la vivienda empalma con la política kirchnerista de internalización del conflicto vía satisfacción gradual de demandas. Sin embargo, se constituyó también en un terreno de disputa con organizaciones autónomas del gobierno. Al mismo tiempo, la difusión de este tipo de protestas, en muchos casos con un alto grado de espontaneidad, tiende a desbordar la capacidad de respuesta del gobierno. La amenaza latente es la generalización espacial y la sincronización temporal de las acciones.

Un segundo conjunto fueron las rebeliones de usuarios de trenes. Entre principios de 2005 y fines de 2007 usuarios enfurecidos atacaron y quemaron estaciones y formaciones de trenes en reiteradas oportunidades frente a demoras y cancelaciones. La actitud del gobierno antes estos hechos fue inicialmente ambigua. Sin embargo, hacia 2007 predominó en el discurso oficial la responsabilización de las empresas y durante ese año se decidió, en respuesta a nuevos incidentes, la reestatización del ramal Roca. Esta estatización, al igual que la posterior de Aerolíneas Argentinas, y a diferencia de las simples estatizaciones rescate del Correo Argentino y de Aguas Argentinas, manifiesta las tensiones generadas por el mantenimiento de lo esencial del proceso privatizador y una lógica de construcción de consenso que, debiendo canalizar las impugnaciones a las consecuencias del proceso privatizador, cuestiona y pone en crisis la relación entre Estado y empresas privatizadas.

Dentro de un tercer conjunto, el de las protestas ambientalistas, el movimiento contra la minería a cielo abierto y la asamblea ambiental de Gualeguaychú contra la instalación de fábricas de pasta de celulosa en la costa uruguaya del río Uruguay han sido los más significativos. Si bien tienen particularidades que los diferencian, comparten algunas características que resultan relevantes para nuestro problema. En primer lugar, la apelación a formas de organización y protesta que caracterizaron a las luchas del año 2001: la forma asamblearia y la utilización de cortes de rutas y caminos. En segundo lugar, estas características se encuentran vinculadas a otro rasgo de continuidad con 2001: la desconfianza en los mecanismos de representación. En tercer lugar, esta desconfianza ha conducido a las asambleas a la búsqueda de autonomía respecto de los partidos y del Estado, que en el caso de la asamblea de Gualeguaychú tendió a adoptar un marcado tono antipolítico. En cuarto lugar, las demandas de los manifestantes plantean límites a la capacidad del Estado para interiorizar el conflicto. El rechazo a una actividad considerada contaminante deja poco espacio para soluciones de compromiso. Al mismo tiempo, las protestas apuntan a actividades que han sido de las más dinámicas en cuanto a expansión del producto y atracción de inversión extranjera directa (IED).

Señalábamos antes que el caso Blumberg había logrado catalizar el descontento por la inseguridad y promovido un vasto proceso de movilización. La estrella de Blumberg comenzaría a decaer a mediados de 2006. Sin embargo, las protestas por inseguridad no cesarían, aunque perderían un centro articulador. Durante 2006 y 2007 se multiplicarían localmente las marchas, cacerolazos, cortes de calles, rutas y vías de trenes, ataques a comisarías, incendios de casas de sospechosos y otras manifestaciones por dicho tema.

El análisis del auge y caída de Blumberg nos permite entrever algunas características relevantes de las protestas contra la inseguridad y, por su contraste con otros movimientos, del conjunto de protestas no clasistas y su relación con el sistema político.

La pérdida de popularidad de Blumberg se inició en 2006 cuando dirigió su reclamo a la plaza de mayo y se enfrentó con el gobierno, y sobre todo, en 2007, cuando hizo públicos sus deseos de postularse como gobernador de la Provincia de Buenos Aires y se acercó a referentes de la centroderecha. La razón de esa pérdida de apoyo debe buscarse en el rasgo antipolítico presente en las protestas contra la inseguridad. La principal característica de ese rasgo es un rechazo a la instrumentalización de la problemática, su transformación en un simple medio para la acumulación de poder político. La despolitización del discurso, o su contrario: la acusación de politización, supone una definición de la política como búsqueda de la acumulación de poder por un sector o capa social en interés propio, o de grupos minoritarios, y opuesto al auténtico interés general. Blumberg se tornó sospechoso de instrumentalizar la problemática de la seguridad para “hacer carrera política” y el gobierno, a través de declaraciones de sus funcionarios, lo acusó de ello.

El rechazo a la instrumentalización como núcleo de este rasgo antipolítico alcanza un grado máximo en las protestas contra la inseguridad en la medida que la mayoría de ellas tienen como fundamento procesos de identificación colectiva sostenidos en el dolor, la tragedia o la pérdida personales. El rasgo antipolítico adopta en ese caso el carácter dramático de un rechazo a la instrumentalización del sufrimiento. Y este aspecto se encuentra a su vez vinculado con otro rasgo de las protestas contra la inseguridad: las demandas aparecen enunciadas desde un lugar inmediatamente universal, que no requiere mediación para universalizarse. No sólo por la identidad de los sujetos, “vecinos” o “la gente”, sino también por aquel fundamento inmediatamente universal de la identificación colectiva: el sufrimiento humano. En el caso de la inseguridad, este dramatismo de la identificación fundada en el dolor personal ha quedado como inmediatamente ligado a una serie de oposiciones - garantismo/mano dura, derechos humanos de los delincuentes/derechos humanos de las víctimas, etc. - que le han cuasi fijado un significado afín a las posiciones ideológicas de la derecha local. Sin embargo, no puede reducirse el significado de las protestas contra la inseguridad y de su rasgo antipolítico a este único encadenamiento. El rechazo a la instrumentalización del sufrimiento contiene también una dimensión disruptiva y radical que empalma con la crítica a la política como medio de acumulación de poder de una capa social y al servicio de grupos poderosos presente también en otros movimientos de protesta, como las asambleas ambientalistas, y que se vincula con la crisis de representación manifestada en asambleas y movilizaciones desde 2001.

El movimiento de familiares y amigos de los jóvenes muertos en el local República de Cromagnon el 30 de diciembre de 2004 comparte varios tópicos discursivos con las protestas contra la inseguridad, como el reclamo de penas duras para todos los responsables y el rasgo antipolítico recién señalado. Pero tiene la particularidad de que la búsqueda de justicia para las víctimas los enfrenta a una red de responsabilidades que vinculan al Estado con empresarios de locales nocturnos. Este hecho, junto a la también particular composición del movimiento, ha permitido evidenciar, en la acción y en el discurso de familiares y amigos de las víctimas, la ambigüedad del rasgo antipolítico entre un significado afín a tradiciones autoritarias de cuestionamiento de la política y un significado disruptivo y radical que cuestiona los límites de la democracia representativa y del sistema de partidos.

Es en este nexo entre el rasgo antipolítico de las protestas y la crisis de representación que cobra sentido la pretensión de universalidad inmediata de los sujetos y sus demandas, el hecho, que mencionáramos al inicio de este apartado, de que experimenten su acción como la emergencia del “pueblo” sin representación. Sin embargo, dicha inmediatez plantea un límite al alcance de las demandas enunciadas por las diferentes protestas. En tanto no mediados, los problemas planteados aparecen aislados unos de otros y sin referencia a - desvinculados del - orden social como totalidad, es decir, el precio de la despolitización de las protestas es su particularización, la contracara de su pretendida universalidad inmediata. Es este efecto “particularizante” de la pretensión de universalidad inmediata lo que determina, como hemos planteado antes, el significado político

abierto de muchas de las demandas de estas protestas cuya fijación depende de su articulación contingente en contextos determinados de luchas sociales.

De lo expuesto, surge que el gobierno tuvo mayores dificultades con las protestas gestadas fuera del ámbito laboral pero, al mismo tiempo, mayor capacidad para canalizar las demandas del movimiento por la vivienda y de las protestas de usuarios de trenes que las del movimiento ambientalista, del movimiento de Cromañón y de las protestas contra la inseguridad. En ello han incidido diversas dimensiones – el rol de la minería en la IED, por ejemplo - pero el dominante rasgo antipolítico de estas protestas explica también esas dificultades. La disposición a la negociación – cuando existe algún tipo de organización - y la confianza en funcionarios y dirigentes políticos es sin duda menor en estos tres casos.

De lo expuesto también surge que todas estas protestas, y en particular la tendencia a la apelación a la acción directa radical, indican una resolución incompleta de la crisis de representación abierta con la crisis de 2001. Específicamente, podemos observar un vínculo entre el proceso de movilización de 2006 y 2007 y la reaparición de tópicos de protesta que señalan un hiato entre los “sectores medios” y el gobierno pero que refieren, más generalmente, a una crisis de confianza en el sistema político.

Durante 2006 se desarrolló un proceso de movilización en la provincia de Misiones contra el intento del Gobernador Rovira – alineado con el gobierno nacional - de reformar la constitución para permitir la reelección indefinida. Este proceso, que concluyó con su derrota en las elecciones constituyentes, tuvo un importante impacto en la opinión pública a nivel nacional y determinó que Néstor Kirchner interviniera personalmente para disuadir a otros gobernadores afines de sus intentos reeleccionistas. Durante 2007, el hasta entonces Kirchnerista y candidato a gobernador de Córdoba Luis Juez rompía con el Kirchnerismo denunciando fraude del PJ cordobés con complicidad del gobierno nacional. Desde allí hasta fin de año convocaría a multitudinarias movilizaciones de protesta exigiendo el recuento voto por voto y la realización de nuevas elecciones. Estas movilizaciones ciudadanas marcan una progresiva ruptura de amplios sectores de la población, en particular de los “sectores medios urbanos” de las grandes ciudades, con el Kirchnerismo.

En este sentido, los conflictos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de los docentes de Santa Cruz en 2007 son indicativos del cambio de actitud de los “sectores medios” frente al gobierno y de la oposición política parlamentaria respecto de la acción directa.

A partir de enero de 2007 los trabajadores del INDEC denunciaban la adulteración de los datos de inflación, el accionar de patotas dentro del establecimiento y el hostigamiento laboral permanente a quienes se oponían a la intervención. El fuerte impacto del tema en la opinión pública daba lugar a la articulación entre la oposición política parlamentaria y los trabajadores del INDEC. Diputados, senadores y referentes de todas las fuerzas de la oposición concurrían a las protestas, llevaban el tema al congreso y se manifestaban públicamente a favor de la demanda de los trabajadores.

El mismo año, se producía un extenso conflicto docente en Santa Cruz, la provincia del presidente Kirchner. Más de 60 días perdidos de clase, cortes de rutas y calles, movilizaciones multitudinarias, la instalación de una carpa docente frente a la gobernación y un estado de asamblea permanente dan un indicio de la magnitud del conflicto. El gobierno movilizó a la gendarmería que ocupó los establecimientos para evitar que fueran tomados por los docentes y que se enfrentó con los trabajadores en algunas oportunidades. Un hecho significativo de este conflicto fue la amplia “movilización ciudadana” que acompañó, sobre todo en Río Gallegos – la capital de la provincia -, al reclamo docente. Se produjo una participación considerable de los “sectores medios” de la ciudad no sólo en las movilizaciones convocadas por el gremio sino a través de cacerolazos y de la ocupación de espacios públicos. En este contexto, la oposición provincial, especialmente la UCR que gobernaba la capital provincial, apoyó abiertamente la protesta. Pero también lo hizo la oposición nacional. Dirigentes de la UCR nacional y de la Coalición Cívica de Elisa Carrió se manifestaron a favor de la

protesta y viajaron a la provincia para dar su apoyo. En el marco de la situación política creada por el conflicto, que obligó a la renuncia del gobernador, toda la oposición política provincial intentó articular un frente anti kirchnerista, hecho que finalmente no ocurrió. El enfrentamiento tendió a asumir la forma de un conflicto político, sustentado en la apelación masiva a la acción directa radical. El marcado tono antiinstitucional de las movilizaciones y la impugnación creciente del estilo político del gobierno provincial dieron a la participación de la oposición un carácter novedoso en esos cuatro años. La oposición legitimó o directamente participó de acciones directas y salió del escenario parlamentario e institucional para ingresar en la lucha callejera.

En las elecciones presidenciales de octubre de 2007 la candidata oficialista Cristina Fernández de Kirchner se imponía con el 45,3% de los votos a nivel nacional, duplicando aquel 22% de abril de 2003. La candidata más cercana, Elisa Carrió, reunía el 23 por ciento. Pero el kirchnerismo era derrotado en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Córdoba, con pobres resultados en la ciudad capital, y en la Ciudad de Rosario, con un ajustado triunfo por un uno por ciento de diferencia en toda la provincia de Santa Fe. Los sectores medios de las principales ciudades le daban la espalda.

Marzo de 2008 – Junio de 2009: rebelión de la burguesía agraria y pérdida de consenso

El 11 de marzo de 2008, mediante la resolución 125, el poder ejecutivo pretendió implementar un régimen de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. En un contexto de alza de los precios de las materias primas el gobierno tenía dificultades para contener los precios internos de los alimentos. Al mismo tiempo, necesitaba recursos para sostener un complejo y abultado régimen de subsidios a empresas – destinados mayormente a contener las tarifas de energía y transporte público - y los crecientes pagos de la deuda externa que comenzaban a amenazar el saldo de la cuenta corriente. Las retenciones móviles buscaban poner un techo a los precios internos de las materias primas exportadas por argentina y captar parte del excedente extraordinario de la burguesía agroexportadora si los precios internacionales se mantenían en los niveles de 2008. En la medida que los precios bajaran las retenciones también lo harían.

La relación con la burguesía agraria había sido mala desde el principio. Las asociaciones empresarias que históricamente nucleaban a los grandes propietarios y empresarios agropecuarios – Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Rural Argentina (CRA) – se opusieron siempre a la intervención estatal y, en particular, a las retenciones a la exportación, reimpuestas desde 2002. La Federación Agraria Argentina (FAA) – que nuclea a pequeños y medianos empresarios agropecuarios - y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) – que representa a un sector del cooperativismo agrario - ambas de buena relación inicial con el gobierno, fueron incrementando sus conflictos hasta que en 2007 se sumaron abiertamente al frente agropecuario opositor. Frente a las retenciones móviles las cuatro asociaciones, constituidas como Mesa de Enlace Agropecuaria, convocaron un paro agropecuario y las bases de la FAA se lanzaron a cortar las rutas en todo el país. El conflicto se extendería hasta el 17 de julio atravesado por cuatro extensos paros agropecuarios, el mayor número de cortes de ruta desde 1996¹³, el desabastecimiento de alimentos y un ciclo de movilización social con pocos precedentes desde el retorno de la democracia.

El conflicto en torno a la resolución 125 tuvo varios rasgos que le otorgaron un carácter disruptivo. En primer lugar, por primera vez desde 2002 una fracción de la burguesía, la burguesía agraria de conjunto, rompió abiertamente con el “bloque en el poder” y puso en cuestión las relaciones sociales de fuerza alumbradas por la rebelión popular de 2001. En segundo lugar, no sólo logró concitar el apoyo de los pueblos del interior dependientes de la actividad agropecuaria sino que movilizó en su favor a la población de las grandes ciudades, en particular a los “sectores medios”

¹³ Según Nueva Mayoría, ver www.nuevamayoria.com.

urbanos. Actos y cacerolazos masivos, como no se veían desde diciembre de 2001, se produjeron en las principales ciudades, en particular en la Ciudad de Buenos Aires. En tercer lugar, a lo largo del conflicto se produjo en torno a la Mesa de Enlace Agropecuaria una unidad en los hechos de la oposición parlamentaria que configuró un bloque político-social de derecha. Este bloque, sin embargo, no tendría finalmente una expresión político electoral unificada.

El conflicto en torno a las retenciones agropecuarias tendió a transformarse, ya durante el primer paro agropecuario, en una impugnación del estilo político del gobierno, acusado de autoritario y arbitrario, y específicamente de la delegación de facultades del poder legislativo en el ejecutivo. El quiebre de la convertibilidad en 2001, significó el final de una modalidad de subordinación del trabajo al capital y, como tal, se expresó en cambios en la forma de Estado (Piva 2009c). Dichos cambios, tendieron a configurar una crisis de la forma de Estado desarrollada en los noventa pero sin que se atisben los contornos de una nueva reorganización (Piva 2011b). El fin de la independencia del Banco Central, la subordinación del área económica del gobierno a su sección política y la continuidad de la delegación de facultades del congreso al ejecutivo, supusieron una amplia concentración de facultades en el área presidencial. En un contexto de recuperación de la política monetaria y de elevados superávits fiscal y comercial, el gobierno gozó de un amplio margen para arbitrar entre fracciones de la burguesía. La demanda de la burguesía agraria de devolver al congreso facultades vinculadas a la fijación de impuestos suponía la restitución de su papel histórico de resguardo de la igualdad de los capitales. La identificación del rechazo al arbitraje del ejecutivo entre fracciones del capital, y del rechazo de los “sectores medios urbanos” del estilo político populista en particular y de la política en general, fue muy potente a la hora de posibilitar una alianza de masas liderada por la gran burguesía agraria, algo poco habitual en la historia argentina.

El apoyo y la movilización de los sectores medios urbanos, en particular los de la Ciudad de Buenos Aires, fueron centrales a la hora de explicar la envergadura del desafío de la Mesa de Enlace al gobierno, la radicalidad de las medidas y la extensión temporal del conflicto. Al mismo tiempo, ratifica las características de las protestas de estos grupos durante los años 2006 y 2007.

En primer lugar, ratifica su tendencia a la oposición al gobierno y a su creciente activación. En segundo lugar, ratifica su tendencia a la apelación a la acción directa radical, de tono antiinstitucional. Estos rasgos, al igual que los tópicos y los formatos de protesta, guardan similitudes con la movilización de esos sectores en 2001. Sin embargo, como señalábamos en el anterior apartado, una de las características de estas protestas es que las demandas, al mismo tiempo que son enunciadas desde un lugar inmediatamente universal, son particulares, por lo tanto, que su significado permanece abierto y dependiente de las articulaciones contingentes en el campo de lucha. En 2001, la articulación en los hechos con piqueteros, pobres y trabajadores ocupados dio a las demandas de estos grupos, en particular a la protesta contra la confiscación de los ahorros, el carácter de un enfrentamiento con el gobierno y los bancos. En 2008 la articulación con la burguesía agraria contra el “saqueo del gobierno” tendió a darle el significado, presente también en 2001 aunque de modo subordinado, de una lucha contra la violación de la propiedad privada por parte del Estado, por lo tanto, más afín a las posiciones de la derecha política. El tercer rasgo de la movilización de 2008, es que ratifica la legitimación y la apelación al uso de la acción directa por parte de la oposición parlamentaria.

De conjunto, el cuestionamiento a la delegación de facultades en el ejecutivo y a la interpelación populista del gobierno y la tendencia a la acción directa, antiinstitucional, de los “sectores medios urbanos”, de fracciones de las clases dominantes y de la oposición parlamentaria señalan la existencia de una disputa en torno a los propios mecanismos institucionales de resolución del conflicto social que constituyen el corazón de una hegemonía. Al finalizar el conflicto, que acabó con la anulación de las retenciones móviles, el gobierno había sufrido una extraordinaria pérdida de consenso. La burguesía agraria, en unión con fracciones de los “sectores medios”, demostró una gran

capacidad para desestabilizar la situación política y paralizar la economía. Al masivo impacto del conflicto en los “sectores medios” deben agregarse los efectos sobre las fracciones más pauperizadas de la clase obrera, las más expuestas a la inestabilidad político – económica, a los que siguieron los efectos locales de la crisis mundial.

Por otra parte, el enfrentamiento del gobierno con la burguesía agraria polarizó el conflicto social durante el primer semestre de 2008. Las organizaciones sociales oficialistas, FTV, Barrios de Pie, Movimiento Evita, etc., se movilizaron en respaldo del gobierno y se enfrentaron en las calles con los apoyos urbanos del sector agrario. Algunas organizaciones sociales opositoras, CCC, MST Teresa Vive, MIJD, se enrolaron con la Mesa de Enlace y se movilizaron, cortaron rutas y ocuparon edificios públicos en su respaldo. Un tercer grupo de organizaciones sociales opositoras al gobierno, FPDS, Polo Obrero, MTD Aníbal Verón, buscó con algunas movilizaciones y un intento de acampe en Plaza de Mayo esbozar una posición autónoma de ambos campos, con poco éxito, bajo grado de movilización y casi nula repercusión. La CGT y una parte de la CTA se movilizaron en tres oportunidades en defensa del gobierno junto a las organizaciones sociales oficialistas, la base territorial de los intendentes peronistas del conurbano bonaerense y el grueso del PJ. Es significativa también la disminución de la actividad huelguística durante el semestre.

El segundo semestre de 2008 y el primer semestre de 2009, el conflicto de los trabajadores ocupados estaría determinado por el impacto de la crisis mundial. Aunque todavía fuera la primera causa, las huelgas por motivos salariales se reducirían y se incrementarían las de despidos y suspensiones. Pero, síntoma de los cambios políticos en curso, se incrementaría la proporción de huelgas en demanda de seguridad (ver Cuadro 5). Estas huelgas eran contemporáneas de un nuevo ciclo de movilizaciones de “vecinos” por dicho tema. Es destacable, sin embargo, que el carácter general del conflicto obrero, de ocupados y de desocupados, no sufriera un cambio sustancial de las características enunciadas para el período 2003-2005. De hecho, la intervención del gobierno en lo que amenazaba ser una ola de conflictos por despidos y suspensiones en la industria fue eficaz y ya en el primer semestre de 2009 se encontraba encauzado.

El gobierno, sin embargo, no atinaba a reconstruir el consenso. La combinación de medidas de corte populista y que retomaban demandas de los trabajadores movilizadas durante la década del noventa - reestatización de Aerolíneas Argentinas, estatización de los fondos privados de jubilaciones y pensiones (AFJP), ley de movilidad jubilatoria - se combinaban con un reforzamiento del PJ en detrimento de alianzas más amplias orientadas hacia la centroizquierda como las que caracterizaron al Kirchnerismo en la primera etapa. Esto equivalía a un reforzamiento de la base más estrecha de apoyo kirchnerista: ocupados formales con alto nivel de sindicalización y el núcleo del aparato justicialista. La ausencia de una agenda política que retomara las demandas de los “sectores medios”, la persistencia de bajos niveles de aprobación popular y una diáspora de dirigentes justicialistas a la oposición culminaron con un mal desempeño electoral en las elecciones de junio de 2009. El Kirchnerismo volvió a ser la primera fuerza con el 26,55 por ciento de los votos – 20 puntos menos que en octubre de 2007- pero sólo gracias a la fragmentación opositora que concentró más del 60 por ciento. Además, el Kirchnerismo, con la candidatura del propio Néstor Kirchner, era derrotado por dos puntos en la provincia de Buenos Aires por el candidato de derecha Francisco De Narváez, apoyado por el peronismo disidente. La caída del voto, reflejando el impacto de la “crisis del campo”, era sensible entre los “sectores medios” y entre los más pobres. Tal era el debilitamiento del gobierno que con el mismo vicepresidente como líder de la oposición comenzaba a ponerse en duda en los principales diarios su continuidad hasta el final del mandato.

Julio de 2009 – fin de 2010: volver al primer casillero

Sin embargo, pasadas las elecciones el gobierno recobró la iniciativa política. Como entre los años 2003 y 2005 retomó una agenda democrática orientada a los “sectores medios”. Empezó

lanzando una reforma política que incluyó la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir los candidatos a presidente de cada uno de los partidos políticos. Resistida por los partidos más pequeños, ya que impone un piso de un uno y medio por ciento para acceder a las elecciones generales, se lanzó en el marco de una convocatoria al diálogo político y como un modo de apertura y ampliación del sistema político. Luego, impulsó una reforma de la ley de medios de comunicación audiovisual que fue el caballito de batalla en la lucha por la recuperación del apoyo de una parte de los “sectores medios urbanos”. Desde el conflicto con la burguesía agraria fue evidente la toma de partido de los principales medios de comunicación en contra del gobierno, especialmente del multimedio Clarín. La ley de radiodifusión vigente había sido elaborada y sancionada por la última dictadura militar y su reforma era una vieja demanda de organizaciones de DDHH, de sindicatos de prensa y de un amplio espectro de organizaciones sindicales y sociales. Este grupo de organizaciones había confeccionado en 2004 los 21 puntos por una radiodifusión democrática. Ese documento fue el punto de partida de un proyecto de ley, a su vez modificado para obtener el apoyo de la oposición de centroizquierda. La ley era aprobada y promulgaba en octubre de 2009. Durante 2010, el gobierno impulsaba la reforma del código civil con el fin de posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La ley era aprobada con una importante mayoría transversal a los diferentes partidos políticos en julio de 2010.

También retomaba una agenda orientada a la clase obrera y a los “sectores populares”, especialmente destinada a los sectores más pauperizados caracterizados por su inserción en el sector informal de la economía. Durante el segundo semestre de 2009 lanzaba la “Asignación Universal por Hijo” un beneficio que extiende la asignación familiar que perciben todos los asalariados formales a los desocupados y los trabajadores informales, lo que reducía sensiblemente la indigencia (Agis el al 2010). También se lanzaba el programa de cooperativas “Argentina Trabaja” que crearía 100000 puestos de trabajo. Estas y otras medidas se desarrollaron en un marco de salida de la recesión y de recuperación del empleo, el salario y el consumo.

En este contexto, durante el segundo semestre de 2009 se produjo un ciclo de auge de la conflictividad obrera, tanto de ocupados como de desocupados. Entre los desocupados el 82,5% de las acciones del año 2009 se produjo en el segundo semestre (Cuadro 3). Y después de una fuerte caída de la radicalidad de las medidas desde 2006 hasta 2008, el 85 por ciento de las medidas fueron cortes, ocupaciones, tomas, etc. (Cuadro 3). También entre los ocupados se produjo un ciclo de paros en el segundo semestre de 2009 que, contra lo que ocurre normalmente, concentró el 52% de las huelgas del año entre agosto y noviembre, superando a la suma de marzo, abril y mayo, meses en los que se desarrolla el grueso de las negociaciones salariales (Cuadro 4). Pero lo más notable es que el 10% de los paros de 2009 fueron motivados en conflictos intra o intersindicales, contra un 4% de los dos años anteriores y porcentajes aun inferiores entre 2003 y 2006 (Cuadro 5).

Una aproximación más cualitativa nos permite observar algunos de los conflictos más importantes. Entre los ocupados, destaca el conflicto de la fábrica de alimentos Kraft-Terrabusi, originado en el despido, a mediados de agosto, de 150 trabajadores y de toda la comisión interna y que se extendió hasta noviembre con paros, toma de la empresa, cortes de ruta, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y movilizaciones. Si bien la causa inmediata fueron los despidos, el conflicto estuvo atravesado por la disputa entre la comisión interna, de izquierda, y la dirección del gremio. Otro de los conflictos fue el de los trabajadores de subterráneos que incluyó paros, cortes de vías, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y con patotas de la dirección sindical. La causa fue la disputa entre el cuerpo de delegados de los subterráneos de Buenos Aires, que exigía que el ministerio de trabajo diera la inscripción gremial a su nuevo sindicato, y la dirección de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio nacional del transporte, que se oponía a la escisión. El tercer conflicto significativo fue el protagonizado por las organizaciones sociales opositoras en contra de la discriminación en la distribución de planes Argentina Trabaja. Un conjunto de

organizaciones que confluyeron finalmente en el frente “cooperativas sin punteros” realizaron varios acampes de más de 24 horas de duración en la céntrica Avenida 9 de Julio, frente al ministerio de desarrollo social, responsable del programa. Los tres conflictos, los que más atención captaron de los medios de comunicación y del gobierno, tienen en común ser conflictos en torno al control del conflicto, como los definiéramos anteriormente. Todos, además, participan del incremento de la radicalidad de las medidas y de la tendencia a la acción directa.

¿Cómo explicar este ciclo de luchas y con estas características durante ese semestre? Sin duda intervienen diversas dimensiones en la explicación. El debilitamiento del gobierno a causa de la derrota electoral y la legitimación de la acción directa por las patronales agropecuarias y la oposición parlamentaria son dos de ellas. Sin embargo, el debilitamiento del gobierno se había producido ya en 2008, si bien se ratificó en las elecciones de 2009. Por otro lado, el desplazamiento de los “gordos” de la conducción de la CGT desde 2004, abrió un espacio de disputa intersindical avivado por las paritarias y el fortalecimiento de los sindicatos. La derrota Kirchnerista de 2009 también dio más espacio de presión a los “gordos”. La acumulación de fuerzas a nivel molecular a la que nos refiriéramos antes supuso que comisiones internas afirmadas en sus espacios encontraran una oportunidad política en esa apertura de las disputas intersindicales. Sin embargo, el aumento es demasiado general y la situación de disputa sindical, aunque más débil, es preexistente como para ser una explicación suficiente. Una hipótesis que parece adecuarse a los hechos, y complementar las anteriores explicaciones, es que la propia lógica de reconstrucción del consenso del gobierno promovió un proceso de movilización de esas características. El retorno a una lógica de satisfacción gradual de demandas retomando reivindicaciones democráticas y populares, la búsqueda de galvanización del consenso en base a una polarización con la derecha y, en particular, la elección del Grupo Clarín como expresión del poder económico, legitimó un aumento de las protestas obreras de base que cuestionaron el control del conflicto con prácticas burocráticas y clientelares, sindicales y territoriales. El gobierno, presionado por sindicatos e intendentes aliados, respondió inicialmente con una estrategia de desgaste y represión en el caso de Kraft, con una recreación de la estrategia “ni palos ni planes” en el caso de los acampes contra el plan Argentina Trabaja y con un dolor de cabeza frente a la paralización de los subtes. Finalmente, terminó cediendo en las tres, incapaz de sostener una posición contraria a las pretensiones de democratización sindical, de movilización contra el clientelismo y, en general, de aumento de las reivindicaciones populares sin deslegitimar su discurso.

Pero su programa de reformas democráticas también incentivó, en este caso como estrategia explícita, la movilización a favor de la ley de medios y estimuló las protestas y apoyos en torno a la ley de matrimonio igualitario.

Como entre 2003 y 2005, el gobierno, lejos de debilitarse con el aumento del conflicto se fortaleció internalizándolo en una lógica reformista de concesiones que se amplió a una parte importante de los “sectores medios”. Para mediados de octubre de 2010 la aprobación popular al gobierno superaba el 35% y se acercaba según algunas encuestas al 40%. La muerte de Néstor Kirchner sólo potenció y a lo sumo aceleró un proceso que se desarrollaba y que se apoyaba, además, en la evidencia de que sumar los votos de la oposición en 2009 era imposible. La oposición política fragmentada era incapaz de una acción política coordinada. Este hecho que parece coyuntural es en realidad estructural y sobre ello volveremos al final de este artículo. Aun el asesinato del militante de izquierda Mariano Ferreyra por una patota de la dirección sindical de la Unión Ferroviaria, que debió haber debilitado al gobierno por su vínculo con la CGT, lo fortaleció cuando fue evidente que impulsó la investigación y le soltó la mano a su otrora aliado.

2010 terminaba con tomas de tierras, nada menos que en un parque público, el Indoamericano, en plena ciudad de Buenos Aires, que daban lugar a una generalización de tomas en la ciudad y en el conurbano bonaerense. Nuevamente el gobierno, a pesar de ser inicialmente partícipe a través de la policía federal de un intento de desalojo en el que se asesinó a dos personas, desplegaba su lógica

oponiendo una actitud negociadora, de no represión y de respuesta a las demandas populares frente a la posición de restauración del orden del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, representante de la derecha política¹⁴.

Los límites del consenso ¿es posible hablar de hegemonía desde 2003?

El gobierno logró construir un amplio consenso entre 2003 y 2007 y pudo reconstruirlo después de su dilapidación durante el “conflicto del campo”. En ambos casos, una lógica de satisfacción gradual de demandas basada en una agenda que retomó, selectivamente, y resignificó reivindicaciones democráticas y populares forjadas desde la resistencia al neoliberalismo en los años noventa le permitió galvanizar el consenso y polarizar el espacio político identificando con la derecha y la vuelta al pasado al grueso de la oposición. Decimos selectivamente porque fueron excluidas una serie de demandas de reforma también sostenidas por el sindicalismo opositor al menemismo y por un amplio abanico de organizaciones sociales. Si los cambios en el modo de acumulación permitieron compatibilizar acumulación de capital y otorgamiento de concesiones, las concesiones otorgadas fueron aquellas compatibles con la acumulación de capital. Pero fueron suficientes para reconstruir el consenso.

Sin embargo, esta reconstrucción inmediata del consenso en torno de los gobiernos Kirchneristas nos remite a la segunda de las dimensiones de la recomposición política a las que hiciéramos mención al inicio del trabajo. Pero la primera y más fundamental recomposición de la hegemonía plantea interrogantes.

Hemos dicho que el corazón de una hegemonía es la constitución de mecanismos institucionales de canalización del conflicto en tanto que manifestación coyuntural de las contradicciones sociales. También hemos visto que el conflicto obrero muestra señales duraderas de normalización e institucionalización. Sin embargo, al mismo tiempo, una serie de indicadores muestra dificultades para la traducción institucional de un amplio abanico de conflictos y demandas mucho menos asibles.

Dado el proceso de desorganización de clase y de desproletarización subjetiva que significó la derrota de la clase obrera desde 1989 (Piva 2011), aun en un contexto de recomposición de la acción y de la organización de los trabajadores, la contradicción capital/trabajo encuentra expresión en una inorgánica y heterogénea gama de conflictos y de modos de intermediación política que no tienen su espacio de constitución en las identificaciones clasistas, y menos aún en el mundo laboral. Este conjunto heterogéneo abarca a los “sectores populares” y a los “sectores medios urbanos”. No es extraño entonces que la institucionalización del conflicto obrero no sea suficiente para la estabilización de una dominación hegemónica.

¿Cuáles son los indicadores de que la reconstrucción del consenso no sedimentó en una hegemonía política?

En primer lugar, la apelación generalizada a la acción directa, no institucionalmente mediada, y en muchos de los casos, especialmente en manifestaciones no obreras, directamente anti institucional. Los efectos de esta tendencia han sido moderados por su carácter inorgánico y por la mayor capacidad del gobierno para internalizar el conflicto orgánico. Pero su potencial disruptivo emergió con fuerza durante el conflicto con la burguesía agraria, aunque adquiriera el carácter de movimiento restaurador.

En segundo lugar, el rasgo antipolítico o de rechazo de la política de las protestas como

¹⁴ Aunque excede los límites temporales de este artículo, este proceso culminaría en octubre de 2011 con la reelección Cristina Fernández de Kirchner con un 53,96% de los votos, seguida por el Frente amplio Progresista (Hermes Binner) con un 16,87% y la Unión para el Desarrollo Social (liderada por la UCR) con un 11,15%, con una participación electoral de casi el 79% (Fuente: Ministerio del Interior de la Nación)

síntoma de una incompleta resolución de la crisis de representación. También ese rasgo reapareció con fuerza durante el “conflicto del campo”. El significado político abierto de este elemento antipolítico lo coloca en un lugar central en la potencial articulación de protestas generalizadas contra el régimen político, a derecha e izquierda.

En tercer lugar, la tendencia al apoyo y apelación a la acción directa y anti institucional por parte de la oposición parlamentaria en 2007 y 2008. Este hecho significó que en Santa Cruz en 2007 y en todo el país en 2008 la lucha política se trasladara a las calles y rutas siendo la acción directa el medio por excelencia de enfrentamiento. Además, como en 2001, nuevamente el parlamento fue el lugar de reconstrucción precaria del orden institucional traduciendo la “voluntad de las calles”.

Todos estos indicadores señalan la existencia de una disputa en torno a los propios mecanismos institucionales de canalización del conflicto social que constituyen el corazón de una hegemonía. Los conflictos en torno al control del conflicto en el seno de las luchas obreras son parte del mismo fenómeno pero dada la baja densidad de la construcción sindical antiburocrática y la fragmentación y debilitamiento del espacio piquetero opositor no han constituido una amenaza seria a la canalización institucional del conflicto obrero ni a las direcciones sindicales.

Debe añadirse un cuarto elemento que queda fuera del espacio de observación delimitado en este artículo: la dispersión del voto opositor en las elecciones de 2005, 2007 y 2009. *La incapacidad de la oposición para constituir un polo opositor después del conflicto con la burguesía agraria no fue un hecho coyuntural. Manifestó la persistencia de la crisis del sistema de partidos. Pero esta persistencia plantea la imposibilidad de una traducción política electoral de la oposición al kirchnerismo. A su vez, la inexistencia de un eje articulador del sistema de partidos – centro derecha/centro izquierda; populismo/institucionalismo, etc. – impide cualquier representación que permita una lectura, una dotación de sentido, de esa oposición. Este es otro aspecto de la inexistencia de mecanismos institucionales de traducción de las contradicciones sociales¹⁵.*

En estas condiciones, la recomposición del poder político asumió la forma limitada de un consenso en torno al Kirchnerismo, no de una redefinición de la lucha política en el marco de mecanismos institucionales consensuados por oficialismo y oposición. La oposición al Kirchnerismo tomó entonces el carácter de rechazo al modo de recomposición política y su acción política devino fácilmente anti institucional. El resultado de esto fue que el gobierno tuvo éxito en polarizar el espacio político en términos de oposición Kirchnerismo – anti kirchnerismo. El costo de ese éxito fue sacrificar la constitución de una hegemonía que brindara estabilidad a la dominación. El punto no es si aquella pérdida de consenso fue transitoria o si lo es la recuperación actual del gobierno, el punto es la fluidez de la situación política.

La persistencia de la apelación a la acción directa y de la crisis del sistema de partidos es simultánea con una caída del voto en blanco y de la abstención electoral. Esto significa que el resultado final está abierto. La recomposición actual del consenso en torno al gobierno y la fragmentación de la oposición pueden abrir paso a una reconstrucción del sistema político y de la dominación o a una reemergencia de la lucha extra institucional.

¹⁵Para un análisis temprano de la debilidad institucional de la oposición como rasgo del sistema de partidos post 2001 ver (Novaro 2003).

Cuadros

Cuadro 1: Evolución del promedio mensual de paros, junio de 2003 – diciembre de 2009

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
5,4	11,2	17	9,25	16	10,1	10,2

Cuadro 2: Movimientos de desocupados, Indicadores de evolución del conflicto, junio de 2003 – diciembre de 2009

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Promedio mensual de acciones	27,42	40,8	27,3	7,8	2,2	6,5	7,2
Porcentaje de cortes, ocupaciones y tomas	76	82,2	84,8	39,4	30,8	30,8	84,9
Porcentaje de marchas, concentraciones y otros	23,9	17,8	15,2	60,6	69,2	69,2	15,1

Cuadro 3: Número y porcentaje de acciones de desocupados por semestre. Año 2009

	1° semestre	2° semestre	total
Número de acciones	15	71	86
Porcentaje de acciones	17,0	82,5	100

Cuadro 4: Número y porcentaje de paros por mes. Año 2009

	Mes												Total
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Número de paros	7	3	27	10	13	1	2	9	13	14	16	8	123
Porcentaje de paros	5,7	2,4	22,0	8,1	10,6	0,8	1,6	7,3	10,6	11,4	13,0	6,5	100,0

Cuadro 5: Evolución de los porcentajes anuales de paros motivados en demandas de Aumento salarial, Seguridad y en Conflictos intersindicales, 2003-2009

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Aumento salarial	50	77,4	83,8	64,9	60,7	59,5	63,3
Seguridad	5,3	2,3	2	1,8	3,7	5,8	4,2
Confl.intersindicales	2,6	3,8	1,5	0	4,7	4,1	10

Bibliografía

Agis, Emanuel et al (2010): *El impacto de la asignación universal por hijo*, Documentos CEIL-PIETTE, CEIL-PIETTE, Buenos Aires.

Álvarez, Laura y Composto, Claudia (2010): “Minería a gran escala. Estado y resistencias sociales” Ponencia presentada a las VI Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata “Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias Sociales”, La Plata, 9 y 10 de diciembre de 2010.

¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis... Adrián Piva

Antón et al (2010) “Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en Argentina” en *OSAL*, Año XI, N° 28, Noviembre de 2010, CLACSO, Buenos Aires. pp. 95-110.

Atzeni, Mauricio y Ghigliani, Pablo (2008): “Nature and limits of trade unions’ mobilizations in contemporary Argentina”, *Labour Again Publications*, International Institute of Social History, Amsterdam. Disponible en <http://www.iisg.nl/labouragain/documents/atzeni-ghigliani.pdf>.

Auyero, Javier (2007): *La zona gris, violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*, Siglo XXI editores, Buenos Aires.

Bonnet, Alberto y Piva, Adrián (2010): “Estado y cambios en el Estado argentino contemporáneo” *Revista de Estudios Marítimos y Sociales* Año 3, N° 3, Noviembre de 2010, Grupo de estudios sociales marítimos (GESMAR) de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.

Campione Daniel (2008): “Reaparición obrera” en Argentina a partir de 2004” en *López Maya, Margarita; Iñigo Carrera, Nicolás; Calveiro, Pilar, Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina*, CLACSO, Buenos Aires.

Cortés, Martín (2009): *Luchas populares y lógica estatal: entre la autonomía y la institucionalización. Estado y conflicto social en la Argentina contemporánea (2003 – 2007)* Tesis de Maestría, Maestría en ciencias sociales, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, mimeo.

Etchemendy, Sebastián y Ruth Collier (2008): "Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)", en *POSTData*, N° 13, agosto, Buenos Aires.

Gramsci, Antonio (1998): *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Nueva Visión, Buenos Aires.

Horkheimer; Max, Adorno, Theodor W (2006): *Dialéctica de la Ilustración*, Editorial Totta, Madrid.

Lukacs, Georg (1985): *Historia y conciencia de clase*, 2 vols., Sarpe, Madrid.

Marx, Karl (1998): *El Capital*, Tomo 1, Vol. 1, Siglo XXI editores, México.

Novaro, Marcos (2003): “Continuidades y discontinuidades tras el derrumbe político” en *Revista SAAP*, Vol. 1, Número 2, Octubre 2003, SAAP, Buenos Aires.

Paula Lenguita y Juan Montes Cató (comps.) (2009): *Resistencias laborales. Experiencias de repolitización del trabajo en Argentina*, El Aleph, Buenos Aires.

Piva, Adrián (2006): “El desacople entre los ciclos del conflicto obrero y la acción de las cúpulas sindicales en Argentina (1989 – 2001)”, en *Estudios del Trabajo*, 2º semestre de 2006, ASET, Buenos Aires. pp. 23-52.

Piva, Adrián (2008): “Monsieur Le Travail, Monsieur Le Capital y Madame La Terre. Notas críticas sobre la noción marxista de clase” en *Bajo el Volcán*, año 7, n° 13, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México. pp. 103 – 135.

Piva, Adrián (2009): “Hegemonía, Estado y lucha de clases” en *Nuevo topo. Revista de historia y pensamiento crítico*, N° 6, Buenos Aires. pp. 111-132.

Piva, Adrián (2009b): “Vecinos, Piqueteros y Sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001” en Bonnet, Alberto y Piva, Adrián, *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*, Peña Lillo – Ediciones Continente, Buenos Aires. pp. 19-70.

Piva, Adrián (2009c): *Acumulación de capital y hegemonía en Argentina*, Biblos, Buenos Aires. (En prensa).

Piva, Adrián (2011), “¿Fin de la clase obrera o desorganización de la clase?” en Bonnet, Alberto (comp.) *La Argentina invisible. Debates sobre la Argentina reciente*, Peña Lillo – Ediciones Continente, Buenos Aires.

Piva, Adrián (2011b): “Una aproximación a los cambios en la Forma de Estado en Argentina (2002 – 2009)” en *Revista Theomai*, número 23, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal. pp. 1-23.

Scolnik, Fernando (2009): “El movimiento obrero argentino entre dos crisis: las organizaciones de base antiburocráticas en el área metropolitana de Buenos Aires durante el período 2003-2007” en *Revista Conflicto Social*, año 2, número 2, IIGG – UBA, Buenos Aires. pp. 224-255.

Sohn Rethel, Alfred (1980): *Trabajo manual y trabajo intelectual (crítica de la epistemología)*, Editorial Viejo Topo, Bogotá.

Svampa, Maristella (2008): “Argentina: una cartografía de las resistencias 2003 – 2008” en *OSAL*, año IX, número 24, CLACSO, Buenos Aires. pp. 17-49.

¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis...
Adrián Piva

Svampa, Maristella (2008b) *Cambio de época, movimientos sociales y poder político*, Siglo XXI, Buenos Aires.

Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra (2003): *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Biblos, Buenos Aires.

Thwaites Rey, Mabel (2010): “Después de la globalización neoliberal: ¿Qué Estado en América Latina?” en *OSAL* Año XI, N° 27, abril, CLACSO, Buenos Aires